

Intervención de Juan Vicente Herrera

19 Interparlamentaria popular

Salamanca, 18 de Mayo de 2013



Querido Presidente: con todo nuestro afecto, bienvenido de nuevo a Castilla y León. Un saludo cordial que extiendo a todos los que estáis participando en Salamanca en esta Interparlamentaria Popular. Gracias por celebrar aquí una reunión que creo es especialmente importante y oportuna en este momento tan difícil y complejo. Sobre todo por dos razones fundamentales.

La primera razón se refiere a la misión propia de la Interparlamentaria. Que es la de coordinar la actuación de nuestros Grupos en el Congreso, Senado, Parlamento Europeo y distintos Parlamentos Autonómicos. Y con ello, la de mantener la necesaria cohesión y coherencia de nuestro mensaje en toda España, algo que nos fortalece, y que ha sido siempre muy valorado por los españoles. Desde mi dedicación a la política autonómica durante todos estos años, es un orgullo que el Partido Popular me ofrezca la oportunidad de trabajar por los intereses más cercanos, de Castilla y León, y de los castellanos y leoneses, y de participar con ello al tiempo de nuestro gran proyecto para España.

Y la segunda razón se refiere a la responsabilidad que tenemos, en particular quienes aquí estamos, de defender el valor y la nobleza del trabajo político y parlamentario, y de ser ejemplares en su ejercicio. Para reforzar con ello el vínculo democrático que nos une con los ciudadanos. Un vínculo hoy debilitado, además de interesadamente en algún caso, por el disgusto social frente a la larga y profunda crisis que estamos sufriendo. Y también por un descrédito al que tanto han contribuido algunas conductas impropias y de indecente enriquecimiento, que rechazamos todos los que, con nuestros errores y aciertos, luces y sombras, sentimos el honor de dedicarnos al servicio público.

Queridas amigas y amigos: sin duda, la realidad más dramática de esta crisis son los 6,2 millones de españoles, 262.000 en Castilla y León, que queriendo trabajar no pueden hacerlo. Todos ellos, y en especial los más jóvenes, deben sentir nuestra cercanía y compromiso. Y deben saber que vamos a seguir trabajando para

devolverles la esperanza, y ofrecerles soluciones y alternativas. Para ello, el empleo es nuestro objetivo prioritario. Tenemos por supuesto la obligación de explicar que las políticas puestas en marcha en este último año y medio, y los sacrificios asumidos por la sociedad, están dando ya resultados positivos frente a los graves desequilibrios de la economía española. Pero creo que sólo podremos afirmar honestamente que estamos saliendo de esta crisis, cuando esos resultados produzcan un crecimiento económico, y éste se traduzca en creación de nuevos puestos de trabajo.

Además de esta primera y fundamental dimensión humana, la crisis presenta también otra dimensión institucional, que se ha extendido a muy diversos ámbitos. Como es lógico, entre ellos me preocupa especialmente la puesta en cuestión que se hace de nuestro “modelo autonómico”. Una tema al que ahora quiero referirme.

Hay demasiado ruido en torno a las Comunidades Autónomas, a las que algunos no dudan en señalar como principales responsables de esta crisis. El enemigo a eliminar para superarla. Pero quienes plantean soluciones recentralizadoras no pueden demostrar las posibles ventajas de las mismas, a la vista de la experiencia europea de que la mayor parte de las naciones que mejor están resistiendo este duro tiempo cuentan con una amplia descentralización política. Quienes defienden propuestas federalistas no son capaces de definir las, ni de darlas coherencia. No aportan más que mayor confusión, y sólo parecen tener prisa para resolver sus propias contradicciones y sus problemas internos. Y quienes tratan de imponer proyectos separadores se empeñan en un camino que no va a ninguna parte. Que nos perjudica a todos. Y que desde luego no merece ninguna ventaja o privilegio particular que anime a pensar que las amenazas de ruptura son rentables. Pues siempre será un esfuerzo inútil intentar contentar al que nunca se va a dar por satisfecho, y hace de la diferencia su única razón de ser.

Por todo ello, estoy convencido de que lo más inteligente es construir sobre lo ya hecho. Mejorar nuestro modelo autonómico. Enmendar

sus defectos, excesos y duplicidades. Garantizar su eficacia y eficiencia, a través por ejemplo de las reformas anunciadas por el Gobierno sobre unidad de mercado y simplificación administrativa. En fin, recuperar en torno al mismo un gran consenso político sobre unas reglas de juego que excluyan de una vez por todas a nuestra estructura territorial del debate ordinario. El Partido Popular ha manifestado muchas veces su compromiso con este modelo ya tan nuestro. Y no tengo ninguna duda que tal compromiso se va a seguir manteniendo.

Expreso esta convicción desde la experiencia de Castilla y León, que está cumpliendo ahora 30 años como Comunidad Autónoma, los 26 últimos con Gobiernos del Partido Popular.

30 años de autonomismo útil para las personas, leal con España, y cooperativo con todos. En los que hemos afrontado situaciones muy complejas, tanto para nuestro desarrollo social y económico, como para construir Comunidad. Hemos consolidado un proyecto común desde el respeto a los sentimientos particulares. Ejerciendo la libertad amparada por la Constitución. Aprovechando todas las posibilidades de nuestra participación en la UE. Pero también interpretando correctamente lo que significaba el Estado de las Autonomías. Cuya justificación no ha estado nunca en conseguir más poder para usarlo como instrumento de presión, exclusión o diferencia, sino en ser útil. En la capacidad que da a cada Comunidad para mejorar los servicios públicos, la calidad de vida de sus ciudadanos, y un mayor dinamismo a través del impulso y apoyo de sus iniciativas emprendedoras y sociales, y la modernización de su sistema productivo y sus infraestructuras.

Éste era el camino correcto. Y al seguirlo, Castilla y León ha sabido aprovechar su gran oportunidad, en términos de más desarrollo económico, y también de más desarrollo humano y cohesión social.

En efecto, en estos años, hemos consolidado un sistema de servicios públicos de calidad y equidad. Presente tanto en el medio rural como

en el urbano. Y que hoy obtiene los mejores resultados educativos de España, y también altas valoraciones ciudadanas y profesionales en sanidad, servicios sociales, y atención a la dependencia.

En estos años, hemos impulsado asimismo una gran modernización de nuestra estructura económica y productiva. Lo que ha multiplicado por siete la riqueza de la Comunidad. Y la ha permitido converger con la media europea. Así como, inmediatamente antes de la crisis, lograr casi el pleno empleo técnico, e incluso crecer en población.

Todo lo cual se ha conseguido, entre otros factores, incrementando diez veces las exportaciones. Fortaleciendo la relación entre el sistema educativo y las necesidades de innovación de las empresas. Pasando de ser una Comunidad exportadora de ahorro a otra, que sigue ahorrando, pero que hoy necesita también financiación externa. En fin, desarrollando sus infraestructuras básicas, lo que por ejemplo nos ha permitido pasar en estos años de 40 a más de 2.000 kilómetros de autovías, o contar ya con una red de alta velocidad ferroviaria que sigue impulsándose.

Queridas amigas y amigos: 30 años después, este balance esencial de nuestra experiencia autonómica demuestra en Castilla y León, como creo que también en el conjunto de España, que ésta ha sido una apuesta acertada. Que además debe seguir siendo el mejor marco de convivencia para nuestro futuro, porque nos proporciona algunos de los instrumentos y medios necesarios para afrontar estos difíciles momentos, y para continuar progresando. Algo que, sin embargo, no podremos hacer nunca aislados, en soledad.

¿Qué estamos haciendo ahora desde el Gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Castilla y León? La realidad nos obliga a concentrar todos nuestros esfuerzos en tres objetivos necesarios y urgentes, como son el crecimiento y el empleo, la cohesión social, y los grandes servicios públicos que tenemos encomendados.

En efecto, el primer objetivo es el de conseguir que estabilidad y recuperación, lejos de excluirse, sean los mejores aliados del futuro. Para corregir los desequilibrios de la economía y de las cuentas públicas, hemos adoptado medidas necesarias, pero sin duda difíciles, duras, nada populares, de desgaste político, tanto en materia de ingresos como de gastos públicos. Pero ese saneamiento y estabilidad no son un fin en sí mismos. Pues, como ya he dicho antes, creo de verdad que sólo podremos hablar de salida de esta crisis cuando vuelva a producirse crecimiento, y sobre todo cuando éste se traduzca en creación de nuevos puestos de trabajo.

Y para ello son esenciales las políticas de competitividad y de empleo. Unas políticas que venimos impulsando en Castilla y León, desde hace ya 18 años, a través de un rico proceso de Diálogo Social, muy activo también en este tiempo de crisis, que estamos empeñados en mantener con nuestros agentes empresariales y sindicales, y extender en todo lo posible al ámbito del acuerdo político. Pero unas políticas que necesitan un mayor compromiso, decisión, rapidez, coherencia y estímulo por parte de la Unión Europea. Y también una más intensa colaboración por parte del Gobierno de la Nación.

Una colaboración del Gobierno que ha sido fundamental en Castilla y León para lograr los nuevos Planes Industriales en un sector tan estratégico como el de la automoción. Gracias, Presidente. Una colaboración que es imprescindible para afrontar ahora otros importantes retos. Entre ellos:

La culminación del proceso de reestructuración del sistema financiero, y el de Cajas en particular.

La reforma y refuerzo de las políticas activas de empleo, para que estén más vinculadas a las políticas pasivas, y sean con ello más eficaces.

Y la definición de un modelo energético estable, moderno y competitivo, que cuente con todas nuestras capacidades y fuentes de energía. El cierre definitivo de Garoña sería un gran fiasco empresarial. Y tengo la obligación de seguir defendiendo que en ese nuevo modelo energético estén presentes el carbón autóctono y las

centrales térmicas que lo transforman. Es este un sector que está sufriendo un momento de enorme incertidumbre. Con gravísimos problemas sociales, empresariales, laborales, familiares y territoriales, que necesitan soluciones urgentes para la situación de emergencia que viven nuestras cuencas. Un sector que ciertamente está sujeto a un estricto marco europeo, por cierto pactado por el anterior Gobierno de la Nación, que impone entre 2014 y 2018 el fin de todas las ayudas públicas que viene recibiendo. Pero al que hay que seguir apoyando en todo lo que sea rentable. Y al que hay que plantear alternativas reales para todo lo que no lo sea.

En otro orden de cosas, Presidente, tu esfuerzo personal en la negociación del próximo Marco Financiero de la UE, va a permitir que España siga siendo receptor neto de recursos económicos en ese periodo. Valoramos muy especialmente el hecho de que el mantenimiento de los fondos destinados a la PAC fuera una de tus más firmes prioridades. Desde una Comunidad agrícola y ganadera como Castilla y León, hemos participado desde el primer momento junto al Gobierno en todo este proceso de reforma. Y tenemos la confianza de que en esta fase final de la negociación, y en su definición interna en España, consigamos entre todos la concreción de un nuevo modelo de ayudas directas y de otros mecanismos de apoyo al sector primario, que permita sobre todo el respaldo al esfuerzo de los profesionales del campo.

El segundo objetivo es el de fortalecer nuestro compromiso con la cohesión social. Sobre todo cuando, por la duración y profundidad de la crisis, tanto ha crecido el riesgo de exclusión para muchos ciudadanos, familias y colectivos. Con la aparición entre nosotros de una “nueva pobreza” en capas sociales de nivel medio, que además del empleo ven amenazados otros bienes tan esenciales como el hogar familiar o los propios alimentos.

Estamos trabajando para ofrecerles de inmediato una nueva Red de Protección Social. Que aumente la eficacia de todos los recursos disponibles. Que anime, integre y coordine la insustituible

participación de la iniciativa social y del tercer sector. Que refuerce la cooperación entre Administraciones. Y que desarrolle una estrategia global, capaz de combinar los programas y medidas de inserción laboral de los colectivos con mayores dificultades, las hoy tan necesarias rentas mínimas, y las iniciativas concretas para las situaciones de mayor necesidad.

Y el tercer objetivo es el de asegurar los grandes servicios públicos que tenemos encomendados como Comunidad. Se trata de mantener, y en todo lo posible mejorar, la calidad y la equidad de esos grandes servicios de gestión autonómica: la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Como ya he indicado, los mismos se encuentran sin duda en la parte más positiva de ese balance esencial y objetivo de los primeros 30 años de Castilla y León como Comunidad Autónoma. Pero eso ya es el pasado. Y lo que de verdad debe preocuparnos y ocuparnos hoy es el futuro.

Pues bien, parece claro que al vincular tan estrechamente el Estado Social y el Estado Autonómico, la propia Constitución hace depender buena parte del futuro de nuestro modelo autonómico de la capacidad que las Comunidades tengamos de seguir prestando eficazmente tales servicios. Por eso he reiterado la necesidad de estar atentos a que algunas de las críticas que se hacen al actual modelo autonómico, no encubran en realidad el deseo de menoscabar nuestro Estado o Sociedad del Bienestar.

Pero los grandes servicios de competencia autonómica se mantienen y mejoran con recursos, y se prestan en el territorio en directa relación con la Administración Local. Lo que me obliga a referirme ahora brevemente, para finalizar ya esta intervención, a dos cuestiones de tanta importancia y actualidad como son la de la financiación autonómica, y la de la Reforma Local.

En primer lugar, en materia de financiación, el problema de fondo reside en un sistema vigente, impuesto ahora hace 5 años, que no satisface a nadie. Fallido. Decreciente en solidaridad. Insuficiente para asegurar los recursos ordinarios de unos servicios a los que estamos dirigiendo 8 de cada 10 euros de nuestros Presupuestos. Y que nos condena a un déficit crónico. Por acuerdo de la última Conferencia de Presidentes, el Consejo de Política Fiscal y Financiera lo está evaluando ahora, cara a su necesaria reforma.

Entre tanto, es preciso reconocer de nuevo el compromiso que el actual Gobierno está teniendo con las necesidades financieras de las Comunidades. Y del que son buenos ejemplos la ampliación del objetivo de déficit en 2012, la ampliación del plazo de devolución de las liquidaciones negativas de los ejercicios 2008 y 2009, el Plan de pago a proveedores, y el Fondo de liquidez autonómica, entre otros.

Creo sinceramente que es en el propio Consejo de Política Fiscal y Financiera donde deberíamos situar el debate sobre el nuevo escenario de déficit que la Unión Europea puede autorizar a España, y sobre su distribución interna entre las distintas Administraciones. Tal vez todos hemos precipitado un debate público, lleno de gestos y de declaraciones individuales, y poco favorecedor de acuerdos. Y desde luego muy condicionado por la actitud irritante de algún Gobierno autonómico, que ha sido el primero en exigir un margen más ventajoso que el de los demás, pero para emplearlo precisamente en separarse de los demás.

En ese Consejo de Política Fiscal y Financiera, Castilla y León va a reiterar las razones objetivas por las que defiende que debe continuarse con un mismo objetivo de déficit para todas las Comunidades, de manera que no se penalice ni desincentive ahora a las que en 2012 más esfuerzo realizamos. Pero nuestra Comunidad también favorecerá los posibles acuerdos. Y puesto que defendemos la solidaridad, también la ofreceremos a los que lealmente la puedan necesitar y la soliciten para mantener los servicios básicos a sus ciudadanos, que al fin son españoles como nosotros.

Entiendo sin embargo que las cosas exigen su orden. Y que antes de abordar la cuestión del déficit de cada Comunidad, es obligado acordar una distribución justa del mismo entre las distintas Administraciones. Un reparto que sea proporcional al gasto público real de cada una de ellas: algo más del 35% del total en el caso de las Comunidades. Que atienda la naturaleza estructural y poco flexible del que corresponde gestionar a las Autonomías. Y que atienda también el esfuerzo especialmente intenso que éstas han hecho en 2012, un año en el que protagonizamos el 70% de toda la reducción del gasto público en España.

Por lo que hace, en segundo lugar, a la cuestión de la anunciada Reforma Local, el Gobierno plantea con ella unos objetivos principales que todos debemos compartir: clarificar las competencias de los Municipios, evitar duplicidades, racionalizar sus estructuras, aplicarles los principios de estabilidad, sostenibilidad, y eficiencia, y garantizar el control de su gasto.

Se trata de una Reforma de gran impacto para todo el mundo local de España. Y muy especialmente para el de Castilla y León, donde tenemos el 27,7% de los Municipios españoles (2.248, de los que 2.233 tienen menos de 20.000 habitantes), las $\frac{2}{3}$ partes de las Entidades Locales Menores de España (2.227), y $\frac{1}{4}$ parte de las Mancomunidades de Municipios de nuestra Nación. Un complejísimo mapa municipal que exige, tal y como hemos pedido, reconocer unos plazos y condiciones realistas para su adaptación a esa nueva normativa. Y para que en paralelo los Municipios de nuestra Comunidad puedan hacer uso de los nuevos instrumentos de asociación voluntaria que les va a ofrecer la normativa autonómica, precisamente para ayudarles a seguir adelante con su autonomía y sus competencias, y a cumplir las nuevas exigencias y condiciones de la normativa estatal.

Y se trata de una Reforma que debe valorar la importancia del Municipalismo, y la trascendental labor política y social de los Alcaldes

y Concejales. Agradecer su tradicional austeridad. Reconocer la limitada responsabilidad que las Haciendas Locales vienen teniendo en el problema de los desequilibrios de las cuentas públicas en España. Y no olvidar que la sostenibilidad de las Entidades Locales exige también abordar una profunda y pendiente reforma de la financiación local.

Queridas amigas y amigos: concluyo. Y lo hago recordando que el PP ha asumido siempre la obligación de estar cerca de los ciudadanos. De sus problemas y preocupaciones. A pie de calle. Algo que en los momentos que vivimos es más necesario que nunca.

Son muchos los retos y las dificultades, pero este no es tiempo ni de excusas ni de lamentos. Los ciudadanos nos han encargado a nosotros la responsabilidad de afrontarlos, y debemos estar a la altura. Podemos hacerlo, no lo dudéis. Con confianza. Desde nuestras convicciones y principios. Desde la fuerza de un Partido que, a diferencia de otros, es sólido, está unido, tiene sentido de Estado, y sabe asumir el desgaste de adoptar las medidas que España necesita, aunque no sean gratas. Un Partido que también cuenta con un claro e indiscutible liderazgo en Mariano Rajoy, nuestro Presidente, a quien vamos a escuchar ahora. Ánimo, adelante y muchas gracias.